RÉGIMEN POLÍTICO Y PROYECTO HEGEMÓNICO

El lugar de una intentona autoritaria

JAIRO ESTRADA ÁLVAREZ
PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

En el lenguaje popular se utiliza la expresión "medir el aceite" para indicar cómo con una acción calculada en realidad se busca valorar una situación determinada o las respuestas que ella puede provocar y entonces sí actuar en consecuencia. Tal parece ser el caso del muy tempranamente fracasado proyecto de acto legislativo (PAL) con el cual un grupo de congresistas de diferentes partidos del establecimiento colombiano, de actividad más bien anodina en las lides parlamentarias, pretendía unificar los periodos del Gobierno Nacional con aquellos de los gobiernos departamentales y municipales, extendiéndolos además a cinco años, y por esa vía prolongar de facto por dos años más el mediocre período presidencial de Iván Duque y del actual Congreso de la República. Lo cual hubiera implicado también la unificiación de las elecciones en todos los niveles.

La iniciativa, que fue gestada por la Federación de Municipios, incidía además sobre los períodos de quienes regentan los organismos de control, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, y seguramente hubiera obligado a considerar aquellos de la Junta directiva del Banco de la República y de otras instituciones consagaradas en la Constitución de 1991. Después de la incorporación (transitoria) de la figura de la reelección presidencial, que posibilitó el segundo mandato de Uribe Vélez, en las más de 40 reformas que ha tenido la maltrecha Constitución vigente, esta hubiera sido una de esas que le daba un golpe certero a lo que queda de su espíritu democrático-liberal, por cierto muy manoseado y en las realidades histórico-concretas de sus casi treinta años de existencia poco desarrollado.

No fue una casualidad que en el proceso de diálogos y negociaciones de La Habana tuviese que aceptarse la persistencia de modalidades de la exclusión política y de verdaderos déficits democráticos, que buscaron ser subsanados en el Acuerdo de paz suscrito con las FARC-EP con las disposiciones contenidas en el Punto 2 "Participación política: Apertura democrática para construir la paz", por cierto incumplidas en su gran mayoría por el Estado colombiano, sumándolas a los numerosos propósitos reformistas y de transformaciones democráticas que se encuentran pospuestos. No ha habido reforma político-electoral, no se han desarrollado los mecanismos de participación ciudadana contemplados en el Acuerdo; no se han implementado las medidas para promover una participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores en igualdad de condiciones y garantías de seguridad. Tampoco, se han podido activar las 16 circunscripciones especiales territoriales de paz para compensar la subrepresentación de los territorios particularmente afectados por el conflicto. El único saldo destacable es el Estatuto de la oposición, en todo caso disminuido en sus pretensiones originales.

La figura de la olla a presión en proceso de cocción, a la espera del destape, pareciera útil para ilustrar sobre las formas de la situación actual. Su destape puede ser lento y paulatino, acompañándose de una también lenta y paulatina expulsión de los vapores; empero, no es del todo descartable la expulsión de la tapa y la erupción abrupta de los vapores contenidos. En cualquier circunstancia, lo que se pone al final en evidencia es el efecto de la presión. Lo que hoy inquieta a las clases dominantes se encuentra no solo en el destape, sino en lo que le pueda seguir a él. Situados en ese escenario, es más que evidente que existe un "miedo al pueblo", acuñando una expresión usada en la investigación histórica al momento de analizar el accionar de las clases dominantes en contextos en los que la movilización social y popular ha presionado por cambios políticos y sociales.

Llama la atención que frente a aspiraciones de amplios sectores de la sociedad colombiana por avanzar en dirección hacia la habilitación de mejores condiciones la organización y regulación democrática del conflicto social y de clase que le es inherente al orden social vigente, acercándolas a propósitos democráticos, en todo caso no distantes de entendimientos democrático-liberales, que esencialmente no afectan de manera sustantiva el existente régimen de dominación de clase, la pretendida respuesta sean reiterados intentos de reforzar el cierre democrático, o para expresarlo de manera más explícita, acentuar los rasgos autoritarios del Estado y el régimen político, buscando incluso constitucionalizarlos.

Más allá de declaraciones de miembros del alto gobierno que desvirtuaron la señalada iniciativa, o de sectores del Congreso que se anticiparon a rechazarla, de la esperada inviabilidad política pues se calculaba que no se contaría con las mayorías parlamentarias para su trámite exitoso, o incluso de su anunciada inconstitucionalidad aún siendo aprobada por el Congreso, dada la jurisprudencia vigente (C-551 de 2003), el hecho mismo del anuncio del proyecto de acto legislativo, fallido entre tanto, debe ser considerado con particular atención. Inicia-

tivas de este alcance, así puedan llegar finalmente a ser catalogadas como "cortinas de humo", hacen parte de movimientos tácticos y pueden considerarse como componentes de estrategias más complejas. Algo similar parece estar ocurriendo con la propuesta de referendo formulada por Uribe Vélez, cuando se encontraba arrinconado el año pasado por la actuación de la justicia en el proceso que se le lleva por falsificación de testigos.

En la acción política -y también en el análisis político- no debe desecharse ninguna postura o actuación de quienes constituyen e intervienen en la contienda política, incluso tratándose de distractores, como evidentemente ocurrió con el fallido PAL. La "medida de aceite" en este caso hace parte del repertorio de acciones de los sectores más extremistas de la derecha colombiana, perseverante en su propósito de subvertir el orden amparándose en el propio orden existente, para darle rienda suelta con el ropaje de la legalidad a sus consabidos propósitos autoritarios y de fortalecimiento de procesos de fascistización.

La rápida reacción de los más amplios sectores políticos y sociales frente al exabrupto que se pretendía poner en marcha, acompañada de los anuncios de movilización social en contra de la iniciativa, liquidaron en tiempo récord los sibilinos argumentos en los cuales decían apoyarse los principales de los impulsores del PAL: Primero, superar la irracionalidad existente en la organización y funcionamiento del Estado por tenerse en la actualidad períodos dispares de gobierno en los niveles nacional y de los entes territoriales; segundo, no distraer la gestión de la pandemia del covid-19 y, sobre todo, ahorrar recursos que se estiman en 3,4 billones de pesos. Propósitos aparentemente loables de racionalidad y ahorro fiscal en tiempos de excepcioanlidad.

Desde mi punto de vista, la fracasada iniciativa debe ser situada en el contexto de la complejidad propia la contienda política, comprendida esta no exclusivamente en la perspectiva de las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2022, sino más allá, con fundamento en el estado actual del conflicto social y de clase y de los rasgos que

https://cuestionpublica.com/trucos-lobby-salud-colombia/

exhiben tanto la dominación de clase como la situación de la acumulación capitalista. Ese estado, dada la excepcionalidad impuesta por la pandemia del coronavirus no permite identificar con suficiencia los rasgos del momento histórico-concreto, particularmente lo que se encuentra en la trasescena, y sobre todo la dimensión probable de las luchas, los alcances que se podrían esperar de la movilización social y popular.

La figura de la olla a presión en proceso de cocción, a la espera del destape, pareciera útil para ilustrar sobre las formas de la situación actual. Su destape puede ser lento y paulatino, acompañándose de una también lenta y paulatina expulsión de los vapores; empero, no es del todo descartable la expulsión de la tapa y la erupción abrupta de los vapores contenidos. En cualquier circunstancia, lo que se pone al final en evidencia es el efecto de la presión. Lo que hoy inquieta a las clases dominantes se encuentra no solo en el destape, sino en lo que le pueda seguir a él. Situados en ese escenario, es más que evidente que existe un "miedo al pueblo", acuñando una expresión usada en la investigación histórica al momento de analizar el accionar de las clases dominantes en contextos en los que la movilización social y popular ha presionado por cambios políticos y sociales.

Llama la atención que frente a aspiraciones de amplios sectores de la sociedad colombiana por avanzar en dirección hacia la habilitación de mejores condiciones la organización y regulación democrática del conflicto social y de clase que le es inherente al orden social vigente, acercándolas a propósitos democráticos, en todo caso no distantes de entendimientos democrático-liberales, que esencialmente no afectan de manera sustantiva el existente régimen de dominación de clase, la pretendida respuesta sean reiterados intentos de reforzar el cierre democrático, o para expresarlo de manera más explícita, acentuar los rasgos autoritarios del Estado y el régimen político, buscando incluso constitucionalizarlos.

Más allá de la gestión de la pandemia, que por cierto ha hecho notoria la precariedad del gobierno y su descarado talante neoliberal, lo que se está viviendo en el presente es un alistamiento de las fuerzas en contienda para el período posterior, que ante la insuficencia de elementos para caracterizarlo con rigor, se puede definir por lo pronto como de "pospandemia". La condición dialéctica de la pandemia consiste en que al tiempo que ha habilitado condiciones para la estabilidad de la dominación de clase, derivadas de la situación de excepcionalidad *de facto* (con prolongación aún relativamente indefinida), imponiendo medidas propias de un régimen dictatorial en los más variados ámbitos, por una parte, no solo no logra resolver los problemas de la reproducción y de la crisis capitalista con los recursos propios de un "estado de guerra", sino que los acentúa dotándolos con nuevos contenidos y argumentos al poner al desnudo la incapacidad -desde el punto de vista sistémico- de superar problemas agobiantes de la sociedad en su conjunto, particularmente los referidos a la dramática cuestión social, tanto en la dimensión estructural como desde la propia cotidianidad, por la otra.

https://www.sbs.com.au/language/spanish/la-presion-social-en-colombia-pone-a-ivan-duque-contra-las-cuerdas

Asimismo, desde la perspectiva de las resistencias y las luchas, de la movilización social, al tiempo que logra disciplinarlas y llevarlas a un "estado de hibernación", en todo caso transitorio, les suministra nuevas condiciones de posibilidad, represadas, pero a la espera de las circunstancias que permitan su irrupción y nueva entrada en movimiento. La prolongación de la pandemia si bien alarga el estado de cosas imperante, genera también demandas frente a su gestión, y sobre todo respecto de lo que ha de seguir en la "pospandemia". Lo coyuntural deviene necesariamente en disputa frente a lo estructural. El gobierno de Duque ha comprendido que puede hacer de la vacunación masiva un instrumento político para validar y darle aliento al proyecto de la derecha colombiana, encubriendo su desastrosa gestión. Igualmente ha utilizado la situación hasta donde le ha sido posible para reforzar los rasgos autoritarios del régimen político y para dar continuidad a políticas con las que se busca reforzar el régimen de acumulación neoliberal en sus contenidos extractivistas y de financiarización. En su último trecho, que entre tanto bordea los 16 meses, se esforzará por sacar adelante iniciativas que garanticen la continuidad del proyecto de la derecha en su versión más extrema.

Las acciones gubernamentales y de su entorno político deben valorarse en un contexto de búsqueda de resultados electorales y de fortalecimiento de la base social del proyecto político, pues se es consciente del descontento social generalizado. Y debe decirse adicionalmente, también tienen el propósito de impactar sobre las configuraciones geopolíticas regionales. Los proyectos de la derecha hace rato que dejaron el ámbito nacional-estatal; poseen una dimensión transnacional y son expresivos de articulaciones y coordinaciones entre gobiernos, partidos y organizaciones afines, en cuya cabeza se encuentra el régimen imperial, así busque proyectarse ahora con una nueva fachada.

El momento que se está viviendo representa en ese sentido un alistamiento diverso, constituido por varios vectores que se busca hacer converger en torno al propósito mayor: preservar la posición de gobierno, para desde ella, darles continuidad a las pretensiones de estabilización de la dominación de clase en el mediano y largo plazo. En ese propósito

El gobierno de Duque ha comprendido que puede hacer de la vacunación masiva un instrumento político para validar y darle aliento al proyecto de la derecha colombiana, encubriendo su desastrosa gestión. Igualmente ha utilizado la situación hasta donde le ha sido posible para reforzar los rasgos autoritarios del régimen político y para dar continuidad a políticas con las que se busca reforzar el régimen de acumulación neoliberal en sus contenidos extractivistas y de financiarización. En su último trecho, que entre tanto bordea los 16 meses, se esforzará por sacar adelante iniciativas que garanticen la continuidad del proyecto de la derecha en su versión más extrema.

pareciera evidenciarse que no es suficiente el orden constitucional existente y -como la termita- se está en la tarea de corroerlo de manera contínua y sistemática para ajustarlo a los intereses de la facción de clase más extremista. Menos aún se confía en la función gatopardista, de moderación y de reforma controlada del mal llamado centro político. Incluso, el progresismo del buen capitalismo humanizado y democratizador se equipara con una amenaza mayúscula; se define como el advenimiento del "castrochavismo". La derecha más extrema lo quiere todo; se encuentra en la tarea de tejer -una veces con cuidado, otras con torpeza- la red en la que pueda atrapar a la sociedad colombiana y conducirla por lo que considera debería ser su "destino manifiesto". El riesgo de la fascistización no es imaginación, acecha, merece la mayor atención.

Dentro de los vectores que hoy se pretende hacer converger para una "acción preventiva" frente a los escenarios pospandemia se encuentran entre otros, primero, la consolidación de una "ambientación" que ya se halla en curso: la preponderancia de políticas de seguridad, inscritas dentro de la lucha contra el "narcoterrorismo", y con ello del abandono de propósitos de construcción de paz completa. Componente importante es la pretensión de posicionar y reforzar el retorno pleno a la "guerra contra las drogas". Segundo, la profundización de las políticas neoliberales de alcance estructural contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, desarrolladas a la sombra de la pandemia, especialmente las referidas a la extracción de recursos, el fortalecimiento del negocio financiero y el alistamiento de territorios ajustado a las tendencias de la acumulación. Tercero, el fortalecimiento de un concepto de finanzas públicas en el que la financiación del Estado descansa sobre el creciente endeudamiento público y el castigo tributario a los que menos tienen, al tiempo que se persiste en un sistema de incentivos y gabelas para los grandes capitales (grupos económicos y corporaciones transnacionales), como se advierte en la reforma tributaria que se encuentra en curso. Cuarto, la persistencia de políticas de subsidios condicionados hacia los más pobres, de bajo costo fiscal, útiles para posicionar una idea un compromiso social en medio de la pandemia y sobre todo para construir base social. Quinto, el papel activo, como de "punta de lanza" de intereses imperiales y de la derecha transnacional, en la contención de la presunta amenaza castrochavista, lo cual incluye la política frente a Cuba, el injerencismo en Venezuela y las pretensiones de incidir en contiendas electorales de países vecinos, mas recientemente en el caso de Ecuador.

En la trasescena de esa "acción preventiva" para la estabilización de la dominación de clase que se considera amenazada, se proyecta como condición la idea de un "Estado fuerte", sustentado en la "legalidad", lo cual incluye numerosas intentonas para una readecuación institucional en función de ese propósito. Sin duda, la pandemia ha sido útil para esa pretensión, pues ha permitido fortalecer los rasgos autoritarios del régimen político. La cuestión de fondo en este aspecto consiste en cómo darle a la excepcionalidad transitoria la calidad de permanente, amparándose en el orden constitucional existente. Durante este gobierno se han apreciado varios intentos en esa dirección. Su desprecio por el precario orden democrático liberal ha sido más que evidente y comprobable en numerosos episodios. Su talante autoritario se exhibe continuamente en asuntos de la cotidianidad política y sobre todo en la manera como ha enfrentado la protesta social. El "fascismo cultural" promovido desde las más altas esferas, anclado en sectores de la población, se difunde con alevosía en el conjunto de la sociedad y hace parte indiscutible de estrategias de acción comunicativa que justifican la destrucción y el exterminio del otro.

En ese marco, no deben sorprender en absoluto iniciativas como la del fracasado acto legislativo que aquí se ha comentado. Para nada son ingenuas. No pueden considerarse un disparate. Sin duda se trató de una "medida de aceite", que contó con una rápida reacción que la sepultó sin que hubiera podido siquiera cumplir la función de "cortina de humo". Lo cual habla bien del "malestar en la cultura" y del estado en que se encuentra actualmente el conflicto social y de clase.

https://generusuga.wordpress.com/2020/02/22/culpa-compartida/amp/